

**CONFERENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO, ANTE EL CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES –CPEI-**

Lima, 15 de Febrero de 2001

Para mí es especialmente grata la oportunidad que me brinda el Doctor Allan Wagner, Presidente del Centro Peruano de Estudios Internacionales y distinguido amigo y Canciller, para dictar una conferencia sobre la política exterior colombiana ante este selecto auditorio, donde están presentes los peruanos que analizan el devenir internacional de la región y de este hermano país.

Mi intención es tratar ante ustedes algunos temas que considero fundamentales para comprender la complejidad de la situación interna que vive Colombia. Ello nos ayudará a entender mejor las estrategias que el Gobierno colombiano, con el apoyo de los partidos, la participación del Frente Común por la Paz y el sentir del pueblo colombiano, viene implementando para solucionar el conflicto armado por la vía de la negociación, así como para asegurar el respaldo político, la cooperación financiera y la asistencia técnica que requiere la construcción de la paz de parte de la comunidad internacional.

## Colombia en el contexto regional

Colombia es el segundo país en población de Suramérica y el cuarto en territorio. Cuenta con un pueblo culto y emprendedor, que ha dado a Latinoamérica y al mundo un Premio Nobel de Literatura, artistas, científicos y deportistas de talla universal, y que ha logrado con esfuerzo construir una de las más sólidas y prósperas economías de la región. Es el único país de Suramérica con costas sobre ambos océanos y su territorio abarca distintas regiones del subcontinente, como son la andina, la amazónica, la pacífica y la caribe. Colombia cuenta también con una de las democracias más tradicionales de la región y con sólidas instituciones públicas y privadas que nos han permitido preservar nuestros valores democráticos aún en medio de las más grandes dificultades.

Cito estos hechos que ustedes bien conocen, como expertos que son en el área de las relaciones internacionales, porque en estos momentos, cuando en algunos sectores se percibe a Colombia como "país problema", conviene recordar la importancia de esta nación en el contexto continental. Hemos logrado construir una dinámica clase media y un sector

empresarial emprendedor; contamos con prestigiosas universidades y centros académicos; representamos un importante mercado para los países vecinos, y proyectamos con excelencia los valores de la cultura y el idioma que compartimos con todos los pueblos hermanos de Hispanoamérica.

Si colocamos todos estos atributos de mi país y de mi pueblo en una balanza y en contraposición con el conflicto armado y el narcotráfico, verán ustedes que son muchas más las proyecciones positivas de Colombia a la región que las dificultades coyunturales que la actual situación colombiana pueda representar para nuestros países vecinos. Como Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia considero apenas justo con mi país y con mi pueblo que se reconozca esta realidad en la forma más objetiva y ponderada posible y con la responsabilidad histórica que ello merece.

### El Proceso de Paz y el Plan Colombia

El reto ante el cual estamos enfrentados hoy los colombianos, como nación y como parte de la comunidad mundial, es, quizás, el mayor desafío de nuestra historia. Pero tengan la

seguridad, apreciados amigos, de que no estamos entregados a un destino fatal. Por el contrario, somos optimistas, porque sabemos de nuestras propias capacidades, de nuestra determinación y de la gran riqueza de nuestra tierra. Y porque sabemos también que contamos con el apoyo certero de muchos otros países en el mundo, -incluyendo el respaldo fraterno del Perú-, que han entendido y valorado nuestra lucha como pueblo.

Colombia atraviesa su más difícil prueba y su futuro está en la cuerda floja por causa de la violencia y el narcotráfico. Unos pocos guerrilleros y grupos de justicia privada, que no cuentan con respaldo popular y cuyos miembros no alcanzan ni siquiera a las 40.000 personas (o sea, el uno por mil de la población colombiana) continúan levantados en armas, en el marco de un conflicto armado que ya lleva casi 40 años. Pero, lo que es más grave, estos grupos subversivos se financian en muy buena parte con dineros provenientes de los narcotraficantes, que son otra plaga que ha incidido negativamente en la realidad colombiana.

Estos dos fenómenos: violencia y narcotráfico, que se alimentan y degradan entre sí, como un círculo vicioso, son hoy

los grandes generadores de pobreza, de desempleo y de inseguridad para una gran parte de la población colombiana, que sólo quiere trabajar y progresar en paz y por medios lícitos.

Debemos entender que el problema mundial de las drogas y sus desmesuradas utilidades han cambiando la naturaleza del conflicto en Colombia. No me cabe duda de que ya seríamos una nación en paz si no fuera por la violencia y corrupción que ha fomentado el negocio de las drogas ilícitas.

El Gobierno presidido por Andrés Pastrana ha entendido la necesidad urgente de escapar de este círculo fatal, con medidas audaces y procesos que involucren la voluntad de toda la nación, y desde hace más de dos años ha venido trabajando, de la mano de todos los colombianos y de la comunidad internacional, en solucionar estos graves problemas.

Con este fin, diseñamos una estrategia integral que permita a nuestro país salir adelante y caminar con decisión hacia las promesas y los desafíos del siglo XXI. A esta estrategia se le denominó Plan Colombia, y es un plan que está encaminado a fortalecer la democracia, mejorar la participación ciudadana,

alcanzar la paz, luchar efectivamente contra el narcotráfico, modernizar y ampliar el acceso a la justicia, promover aún más la protección de los derechos humanos y realizar programas sociales que produzcan efectos positivos en la población más necesitada y más golpeada por la violencia y la miseria.

Dentro de las estrategias para recuperar nuestra viabilidad como nación está la de adelantar un amplio proceso de paz con las organizaciones guerrilleras, para alcanzar la conciliación por la vía del diálogo y no por el penoso camino de las armas. El mismo Presidente Pastrana ha visitado a los líderes guerrilleros en sus campamentos en las montañas y ha asumido el liderazgo de un proceso que avanza lento pero seguro. Espero que su curso, alimentado por los esfuerzos y la voluntad de paz por parte de la guerrilla, se haga irreversible y conduzca a una paz duradera.

Hace no más una semana, el Presidente se reunió por tercera vez con el jefe de las FARC en la llamada Zona de Distensión, destinada exclusivamente a los diálogos de paz, y le dieron un nuevo aire a un proceso dentro del cual se ha convenido ya una agenda de temas a discutir y se han realizado audiencias públicas en las que los colombianos han tenido la oportunidad

de exponer sus opiniones sobre los puntos de esa misma agenda. El Presidente Pastrana, con audacia y responsabilidad, ha dado una prueba clara a Colombia y al mundo sobre su indeclinable voluntad de diálogo, pero también sobre su firmeza en la exigencia de hechos de paz por parte de la insurgencia.

Durante este encuentro con el Jefe de las FARC se logró el compromiso de agilizar el intercambio humanitario de policías, soldados y guerrilleros enfermos.

Asimismo, a partir del pasado 14 de febrero se discutirán los temas prioritarios para la solución pacífica del conflicto colombiano, tales como: el cese del fuego y de las hostilidades; la definición de un mecanismo para acabar con el paramilitarismo; la disminución de la intensidad del conflicto armado; la evaluación del cumplimiento de los objetivos de la zona de distensión; y el respeto a los proyectos de erradicación manual de los cultivos ilícitos.

Con la guerrilla del ELN, por su parte, estamos también en conversaciones con miras a iniciar un proceso de diálogos que conduzca a la realización de una Gran Convención Nacional, donde se alcancen los acuerdos que permitan la finalización del conflicto con este grupo.

La paz requiere paciencia, más de la que muchos están dispuestos a concederle. Pero los beneficios de la paz bien valen el esfuerzo. Por eso puedo decirles hoy que vamos avanzando en el camino de la paz de Colombia, superando muchos y muy grandes obstáculos, pero con una voluntad indoblegable.

En cuanto al narcotráfico, la comunidad internacional ha entendido que éste es un problema mundial: un problema de todos que tenemos que solucionar entre todos. Nuestro país ha realizado y continúa realizando grandes esfuerzos para eliminar la producción y el tráfico de estupefacientes de nuestra tierra, pero tenemos que entender que nos enfrentamos contra un enemigo poderoso que tiene tentáculos en muchísimos países y un inmenso poder de corrupción e intimidación.

En Colombia, durante nuestra lucha solitaria, murieron nuestros mejores líderes políticos, nuestros mejores jueces y nuestros mejores periodistas bajo las balas del narcotráfico. Y seguimos en la lucha, no por que nadie nos lo exija, sino por una profunda convicción ética y porque sentimos que tenemos un compromiso para con nuestros hijos y para con las nuevas generaciones de todo el mundo.

Pero el problema es de todos. Por eso hemos acudido a la comunidad internacional para que, bajo el concepto de la responsabilidad compartida, nos ayude a erradicar este flagelo de la faz de la tierra. Los países productores, los países consumidores, los que producen los precursores químicos para fabricar la droga, los de tránsito y aquellos donde se lavan los dineros provenientes del delito, todos tenemos que unirnos en un frente común. ¡Es por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos!

Entendiendo esto, Estados Unidos aprobó una importante ayuda económica y en equipo técnico para colaborar en la lucha contra el narcotráfico y en programas de sustitución de cultivos ilícitos y de fortalecimiento institucional. Otras naciones, como los países de la Unión Europea, Noruega,

Canadá y Japón, que participan, junto con países de América Latina, en el Grupo de Apoyo al Proceso de Paz que se constituyó en Madrid el año pasado, han anunciado también su decisión de aportar a este esfuerzo común, particularmente en el área social, así como contamos con el apoyo de las entidades financieras multilaterales

Pero es importante hacer una precisión fundamental: el Plan Colombia es un plan colombiano que cuenta con el respaldo de los colombianos y goza de apoyo internacional, y no constituye en forma alguna una imposición desde el exterior. Es más: la mayor parte de su financiación correrá por cuenta de nuestro país, que colocará 4.500 de los 7.500 millones de dólares que implica su realización.

Por otra parte, los medios y analistas le han dado demasiado énfasis al componente militar del Plan, cuando éste no llega siquiera a la cuarta parte del mismo. Quizás esto ocurre porque el 68% de la ayuda norteamericana, que es la que más se conoce y se difunde, está destinada a actividades militares o de policía contra el narcotráfico. Pero tenemos que ser claros: el apoyo al Plan Colombia se dirige tanto a su componente antinarcóticos, como a su componente social.

En efecto, más del 75% del Plan Colombia se refiere a aspectos sociales y políticos. Se trata de ofrecer desarrollo alternativo al agricultor de subsistencia, de la modernización y reforma de la rama judicial, de la protección del medio ambiente y del amparo a los derechos humanos.

Para darles un ejemplo concreto, dentro del Plan Colombia tenemos prevista una Red de Apoyo Social por un valor de 900 millones de dólares, recursos que se destinarán a tres programas fundamentales: el primero denominado “Manos a la Obra” para la construcción de proyectos de infraestructura, carreteras, escuelas, hospitales, acueductos, que requieran las comunidades más pobres del país; el segundo programa será la entrega de subsidios directos a las familias de menores recursos, especialmente a aquellas donde las madres sean cabeza de hogar, bajo la única condición de que velen por que sus hijos reciban la atención de salud y la educación que les proporciona el Estado, y el tercer programa de este componente del Plan Colombia será uno destinado a la capacitación de los jóvenes desempleados.

Otra estrategia eminentemente social del Plan Colombia es la de Democratización y Desarrollo Social, al que destinaremos un valor superior a los 2.000 millones de dólares.

Esta estrategia está conformada por dos componentes principales: por un lado, el Desarrollo Alternativo y, por otro, los derechos humanos y la atención humanitaria.

En cuanto al componente de Desarrollo Alternativo es muy importante aclarar que no se trata, como se ha tendido a pensar, de una simple sustitución de cultivos ilícitos. Por el contrario, lo que se busca es promover un desarrollo regional integral que genere verdaderas alternativas de ingreso en el mediano y largo plazo.

Para esto, se dará apoyo a proyectos productivos participativos, rentables y sostenibles en las regiones. Este desarrollo productivo será complementado por inversiones en infraestructura física y social dirigidas a garantizar la competitividad y el acceso a los mercados nacional e internacional. Y todo esto estará a su vez acompañado por programas para el fortalecimiento del capital social, la

promoción de la sostenibilidad ambiental y el desarrollo institucional de las regiones.

No vamos a caer en el peligro de que el remedio resulte peor que la enfermedad. Así que todos los planes de erradicación de cultivos estarán acompañados de un proceso de apoyo social y económico a las regiones afectadas para posibilitar su retorno sin traumatismo a la economía legal. Además, en los casos en que sea indispensable la fumigación, ésta se realizará buscando respetar ante todo el entorno ecológico y humano.

Quiero ser claro: Dado que el Plan Colombia es integral, el Gobierno nacional está determinado a concentrar sus esfuerzos en su componente social.

Esto es particularmente válido en la región del Putumayo, limítrofe con el Perú y el Ecuador, en la cual se ha presentado recientemente el mayor aumento en cultivos de coca. Lo que estamos haciendo en esta zona, con los programas y pactos de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos concertados con la comunidad, es sólo el principio de una gran cruzada de motivación y de desarrollo social para quienes hoy dependen de la economía de la droga. El mes pasado 914 familias

campesinas y los representantes de 10 cabildos indígenas, que agrupan a cerca de 2.500 habitantes, del Putumayo firmaron acuerdos de erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca, y el Gobierno se comprometió, como contraprestación, a garantizar su seguridad alimentaria, a capacitarlos y a financiar sus nuevos proyectos productivos. Como ven, con voluntad y sentido social sí se pueden lograr avances concretos, con respeto por el hombre y por el medio ambiente: avances que también hacen parte del Plan Colombia.

Yo sé que con el Perú, gracias a su exitosa experiencia de erradicación de cultivos ilícitos, y compartiendo además muchas características geográficas y sociales, tenemos muchos campos para cooperar y para aprender. Instrumentos de cooperación técnica horizontal, como los que hemos suscrito con Chile y Argentina, pueden ser una forma ideal para intercambiar experiencias, establecer pasantías y programas de entrenamiento técnico, para potenciar el desarrollo social de nuestras naciones.

Por supuesto, los programas de erradicación voluntaria –de inmensa trascendencia- son válidos frente a los pequeños cultivadores, pero no resultan suficientes para contrarrestar los

cultivos ilícitos a escala industrial. En estos casos sigue siendo necesaria la fumigación, pero la comunidad internacional, y nuestros vecinos en particular, pueden tener la seguridad de que, en dichos eventos, hacemos hasta lo imposible para no comprometer el medio ambiente. Es más: nos hemos negado a usar elementos exógenos como el hongo *fusarium oxisporum*, para evitar riesgos de deterioro no sólo ambiental, sino también en la salud humana.

Por su parte, el componente de derechos humanos y atención humanitaria del Plan Colombia busca reconocer y atender a la población víctima de la violencia y fomentar el desarrollo de su potencial como individuos y comunidad, para estimularla económica y socialmente.

En este sentido, los programas implican inversiones para auxiliar a la población desplazada, a los niños y a las mujeres víctimas del conflicto, a la población afectada por minas antipersonales –concentrando especial atención en la población infantil- y una campaña de difusión del Derecho Internacional Humanitario.

Como ven, apreciados amigos, es cierto que nuestros esfuerzos son contra el narcotráfico, pero al mismo tiempo son esfuerzos a favor de la paz, del desarrollo y de las mejores condiciones de vida de los colombianos más pobres.

Además, quiero hacer énfasis en que el Plan Colombia es un plan abierto, que no oculta nada ni guarda ningún secreto o intención clandestina. Sus programas y planteamientos han sido conocidos y publicados desde el año antepasado. Es un plan transparente que busca la paz y el desarrollo de Colombia, y, por consiguiente, la mejoría de condiciones de toda la región suramericana.

¿Y qué pueden esperar nuestros vecinos, como el Perú, de la aplicación de este Plan? Lo que pueden esperar es que la mayor presencia del Estado colombiano en todo el territorio bajo su jurisdicción derive también en mayor seguridad y mejor comercio para ellos.

Para entender la importancia regional del Plan basta que miremos el horizonte sin su aplicación: ¿Cuál sería el destino de Colombia si no se hace algo a tiempo y se dejan algunas zonas abandonadas al imperio del narcotráfico? ¿Cuánto no

crecería la delincuencia? ¿Cuánto dinero seguiría destinándose para financiar la violencia y promover la muerte?

¡Ahí sí que todos tendrían motivos para temer, ante una verdadera amenaza regional! Pero aumentar la seguridad, la inversión social y la presencia estatal son objetivos que consultan los intereses comunes y que se cumplirán mejor aún si contamos con la cooperación y comprensión de los gobiernos, de los dirigentes y del pueblo de las naciones de América Latina.

En el pasado Colombia apoyó los esfuerzos de Perú y de Bolivia para luchar contra la producción y el tráfico de estupefacientes en sus territorios, soportando incluso que el fenómeno de la producción de planta de coca, que nunca ha sido un cultivo tradicional en nuestros campos, se trasladara, con graves consecuencias sociales y ambientales, a nuestro suelo. Hoy esperamos la misma solidaridad de nuestros vecinos, que, con seguridad, entienden los beneficios de contar al fin con una Colombia en paz, próspera y estable.

La aplicación de la estrategia anti-narcóticos del Plan Colombia busca prevenir un desplazamiento masivo de la población

colombiana hacia los países fronterizos. En el componente de desarrollo social del mismo plan se contemplan ambiciosos proyectos para atender a la población que pudiere resultar desplazada internamente, incluidos los proyectos de desarrollo alternativo.

Pero para tener éxito en estos propósitos la coordinación es fundamental. Tenemos que obrar armónicamente Colombia y los países limítrofes como Perú para lograr que los fenómenos que estamos atacando sean exterminados y no que simplemente se desplacen, como ocurrió en el pasado. De nuestro diálogo permanente, del contacto respetuoso entre nuestras autoridades, de la coordinación policial, militar y judicial, y del adecuado desarrollo de nuestras fronteras, depende que podamos erradicar los cultivos ilícitos, sin afectar por ello a los países vecinos que ya vivieron y están superando este problema.

Lo que no podemos aceptar es que se pretenda combatir un fenómeno mundial concentrando toda la responsabilidad y obligaciones en una nación. La naturaleza misma del flagelo de las drogas ilícitas hace que tengamos que ejercer el principio de responsabilidad compartida y que nos veamos obligados a

luchar en forma mancomunada y eficiente, y con metas acordadas, contra las distintas etapas de la cadena del narcotráfico.

Apreciados amigos:

Los representantes de los países que conforman el Grupo de Río –con cuya dinámica se comprometió Colombia a fondo durante todo el año pasado, cuando ejercimos su Secretaría Pro Témpore-, y los mandatarios suramericanos reunidos en la Cumbre de Brasilia, han expresado su apoyo al proceso de paz en Colombia y a una aproximación regional frente a la lucha contra el narcotráfico.

Claramente, una Colombia estable, una nación en paz, es un interés común para el hemisferio. No hay lugar para fuerzas ilegales en una Latinoamérica democrática e integrada económicamente.

Igualmente importante, tal como se destacó en la Declaración de Brasilia, es nuestro entendimiento de que el narcotráfico y las actividades criminales que se relacionan con el mismo

constituyen amenazas serias contra la integridad de las estructuras políticas, económicas y sociales del continente.

Así como la globalización está llevándonos rápidamente hacia una mayor integración y oportunidades económicas, la naturaleza cada vez más global del tráfico de drogas se ha convertido en el más grande obstáculo para el desarrollo, la paz y la prosperidad en nuestro hemisferio.

Obviamente, la mejor solución para Colombia y los países Andinos sería un mundo libre del consumo de drogas. Entonces no necesitaríamos el respaldo de los Estados Unidos y de Europa en las dimensiones que lo requerimos hoy, y volveríamos al escenario anterior a la explosión del consumo de drogas en la década de los 80.

Por supuesto que a nosotros nos gustaría y propugnamos por un incremento de los recursos destinados a la prevención de la drogadicción y a la educación en este campo.

Pero tenemos que ser prácticos y enfrentar la realidad de un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, donde todos debemos compartir las responsabilidades derivadas de

una nefasta actividad, que es mundial y no nacional. Por ello, en lo que a nosotros corresponde, seguiremos luchando contra la producción y tráfico de drogas, con el apoyo de la comunidad internacional, pero haciéndolo, por supuesto, con un criterio social y ambiental.

Apreciados amigos:

Colombia está cansada de violencia. Cuarenta millones de seres humanos trabajadores, alegres y vitales no estamos dispuestos a dejarnos arrebatarse la esperanza por los enemigos de la convivencia pacífica. Por ello, al margen del desarrollo del proceso de paz, el Gobierno y la Fuerza Pública siguen cumpliendo con su deber constitucional de combatir todos los fenómenos de violencia vengan de donde vengan. No podemos aceptar el secuestro por parte de los grupos insurgentes. No podemos aceptar las masacres y los crímenes perpetrados por las autodefensas. Tampoco que ningún grupo delincuencial amenace, asesine y secuestre a los habitantes de nuestra nación.

Defender a la población civil inermes, y a los niños que son tantas veces víctimas de esta violencia indiscriminada, es un

compromiso que hemos asumido dentro de nuestra Política de Defensa y Protección de los Derechos Humanos y de aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Infortunadamente, hay quienes, en el concierto internacional, pretenden que Colombia luche contra el narcotráfico y controle a los grupos de autodefensas y otras manifestaciones delincuenciales, pero, al mismo tiempo, critican cualquier acción destinada a fortalecer el Estado. El absurdo de este postulado no puede ser mayor. Si Colombia quiere salir adelante, lo primero que tiene que hacer es fortalecer sus instituciones legítimas, incluyendo por supuesto a la Fuerza Pública, para combatir las actividades ilícitas y llevar mayor bienestar y seguridad a la población. Nada haría crecer más a las autodefensas y a la funesta actividad del narcotráfico que unas Fuerzas Armadas débiles, condenadas al fracaso y presas de la corrupción. Por el contrario, unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales, bien dotadas, capacitadas y entrenadas, son la mejor garantía –en Colombia y en cualquier país del mundo- del imperio de la ley y de los derechos humanos, y del marchitamiento de las fuerzas marginales que crecen, justamente, donde hay menor presencia del Estado.

Estimados miembros del Centro Peruano de Estudios Internacionales y amables asistentes a este coloquio:

Esta mañana, ante un auditorio de expertos internacionalistas como ustedes, pude haber hablado de los propósitos que inspiran la política exterior colombiana en diversos escenarios, tales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde participaremos como miembros no permanentes hasta diciembre del año 2002. Pude haber disertado acerca de los desafíos de la integración andina y latinoamericana, del comercio bilateral, de la necesidad de reformar el sistema financiero internacional, o haber expuesto enjundiosas teorías sobre el papel de las naciones en desarrollo en el nuevo esquema mundial del siglo XXI.

Pero no lo hice. Preferí, en cambio, contarles, muy directamente y sin ambages, la realidad de Colombia, de su proceso de paz y del Plan que estamos llevando a cabo para fortalecer nuestro Estado y mejorar la calidad de vida de nuestra gente, en absoluto respeto y coordinación con nuestros países vecinos. Preferí hablarles sobre aquello que a ustedes, con genuino derecho, más les preocupa, porque estoy seguro de que, en la medida en que se superen las distorsiones y

malentendidos, siempre podremos trabajar juntos, Perú y Colombia, en la construcción de una región andina más segura y más próspera.

Todo lo que queremos en Colombia es una mano del mundo para salir de la pesadilla del narcotráfico y la violencia, y dar a nuestra gente oportunidades de vivir al fin una vida digna y sin sobresaltos.

Todo lo que queremos en Colombia, como decía Gabriel García Márquez, es una segunda oportunidad sobre la tierra. Éste es el momento de la verdad y yo sé que, con el apoyo solidario de las naciones del mundo, comenzando por aquellas que, como el Perú, mejor nos conocen y más nos pueden comprender, vamos a lograrlo.

Muchas gracias